

## **La fiscalidad directa en el México decimonónico: el caso de la contribución rústica (1835-1846)**

Ernest Sánchez Santiró  
Instituto Mora  
[esanchez@institutomora.edu.mx](mailto:esanchez@institutomora.edu.mx)

### **Introducción \***

En los años 80 del siglo XX, la problemática sobre la fiscalidad de México como nación independiente fue ocupando un lugar cada vez más amplio dentro de la historiografía económica y política. Era la constatación de que la azarosa evolución político-militar del naciente estado mexicano a lo largo de los dos primeros tercios del ochocientos estaba íntimamente relacionada con los mecanismos de obtención de recursos que sostuviesen las diversas “obligaciones” desempeñadas por una maquinaria estatal en construcción.<sup>1</sup>

La independencia, con la reestructuración paralela del campo de lucha política, llevó asociada el replanteamiento, en principio en los debates públicos y más tarde en diversas iniciativas legislativas, del sistema fiscal heredado de la colonia.<sup>2</sup> A pesar de que a lo largo del periodo 1821-1835, ya bajo el primer imperio ya en la primera república federal, se mantuvo básicamente la estructura fiscal colonial<sup>3</sup> (aunque sometida a una redistribución de las diversas fuentes de recursos entre el poder central y las regiones del país), el periodo no dejó de presentar diversas iniciativas –básicamente en el interior de las entidades federativas- que

---

\* Quiero agradecer el apoyo documental y bibliográfico aportado por Luis Jáuregui y José Antonio Serrano.

<sup>1</sup> Carmagnani, 1998; Tenenbaum, 1985; Marichal, Miño y Riguzzi, 1994; Jáuregui y Serrano, 1998, Marichal y Marino, 2001.

<sup>2</sup> Carmagnani, 1998, p. 136-138; Tenenbaum, 1998, p. 213-217.

<sup>3</sup> Marichal, 2001.

planteaban la progresiva introducción y generalización de la fiscalidad directa en detrimento de las formas fiscales indirectas.<sup>4</sup>

El tránsito en materia fiscal del régimen federal al centralista se produjo con la ley de 3 de octubre de 1835, que transformó las rentas del país en rentas del gobierno central. A los pocos meses, el cambio de régimen fue acompañado del primer proyecto global de reforma fiscal de gran calado el cual implicaba la generalización del sistema de contribuciones directas y que, en función de los resultados, llevaría aparejada la eliminación de una de las principales fuentes de la fiscalidad indirecta: las alcabalas. En una rápida sucesión, se establecieron tres contribuciones que ya no dejarían de aparecer en los diversos proyectos de reforma fiscal planteados y ejecutados, con mayor o menos fortuna y cambios, por los distintos regímenes políticos que se sucedieron en México a lo largo del siglo XIX. Estas contribuciones fueron:<sup>5</sup>

- a) Gravamen sobre fincas urbanas (2 pesos al millar): 30 de junio de 1836.
- b) Gravamen sobre fincas rústicas (3 pesos al millar): 5 de julio de 1836.
- c) Derecho de patente (diversas cuotas según los establecimientos mercantiles): 7 de julio de 1836.

El propósito de este trabajo es analizar en detalle una de estas contribuciones, la contribución rústica, que en el conjunto de los diversos países que acabaron constituyendo el denominado *modelo fiscal latino*, caso de Francia, Italia, España,

---

<sup>4</sup> Dos estudios que esbozan esta tensión entre fiscalidad directa e indirecta a lo largo del periodo 1821-1835 son el de Antonio Ibarra para el estado de Jalisco (Ibarra, 2001) y el trabajo conjunto de Carlos Marichal, Manuel Miño y Paolo Riguzzi para el estado de México a lo largo del siglo XIX (Marichal, Miño y Riguzzi, 1994).

<sup>5</sup> Sánchez Rodríguez, 2001, pp.199-201.

Portugal, etc., fue la columna vertebral de dicho sistema.<sup>6</sup> Pretendemos realizar un estudio que nos posibilite dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo se constituyó la contribución rústica en México? ¿Qué similitudes y diferencias tenía con relación a otras contribuciones rústicas del mencionado *modelo*? ¿Qué resultados produjo? Para ello pretendemos acotar inicialmente nuestro estudio a las diversas contribuciones rústicas implementadas por los gobiernos centralistas en el periodo 1835-1846, toda vez que, en un trabajo posterior, desarrollaremos el análisis de las reformas fiscales en materia de contribución rústica emprendidas tras la guerra con los Estados Unidos.

### **Las contribuciones directas: entre el Antiguo Régimen y el orden liberal**

Desde principios del siglo XVIII, la monarquía española procedió a la introducción de diversas modalidades de contribuciones directas que gravitaban en gran medida sobre la propiedad rústica. Establecidas por Felipe V en los diversos reinos de la corona de Aragón, como consecuencia de su apoyo al pretendiente austracista al trono de la monarquía española, con el devenir de los años acabaron constituyéndose en un modelo a imitar en la corona de Castilla. Según territorios, los nuevos impuestos adoptaron una denominación específica, aunque en sus rubros principales actuaban bajo unos mismos principios y reglas. Concretamente hablamos de<sup>7</sup>:

- I. El Catastro en el Principado de Cataluña.
- II. El Equivalente en el Reino de Valencia.

---

<sup>6</sup> Fuentes Quintana, 1990; Comín, 1996<sup>a</sup>; Rivero, 1957.

<sup>7</sup> Peiró, 1988; Riera, 1988; Ruiz, 1988; Segura, 1988.

III. La Única Contribución en el Reino de Aragón.

IV. La Talla General en el Reino de Mallorca.

Estas contribuciones directas, que venían a sustituir una gran variedad de impuestos y tributos, tenían dos claras ventajas:

- I. Establecían un sistema fiscal permanente que hacía que la monarquía española no dependiese en los antiguos territorios de la Corona de Aragón de la voluntad de las cortes.
- II. Constituían un sistema fiscal bastante simple y efectivo dentro de los parámetros de la época.

Estas características, en especial la última, hicieron que, a llegada la década de los años 40 del siglo XVIII, se intentase introducir este modelo en la corona de Castilla. Concretamente, nos referimos al proyecto de la Única Contribución del marqués de la Ensenada.<sup>8</sup>

No es cuestión de entrar aquí en las vicisitudes propias de este proyecto desarrollado bajo el reinado de Fernando VI y sus secuelas, igualmente fracasadas, sino de simplemente anotar dos elementos:

- a) La contribución directa no pudo ser introducida en “Las Castillas”
- b) Consecuentemente, los territorios coloniales de dicha corona, no vivieron una experiencia de reforma fiscal como la desarrollada en Valencia, Cataluña, Aragón o Mallorca. Ni siquiera se procedió al intento, como sí se hizo en Castilla, de levantar los padrones de riqueza que sirviesen de base a la introducción de la fiscalidad directa.

---

<sup>8</sup> Calvo, 1988; Camarero, 1993; Hernández, 1971.

No será hasta el advenimiento del régimen liberal de Cádiz y su obra legislativa, que se procederá a extender el modelo de la Corona de Aragón al resto de territorios de la monarquía española, aunque, eso sí, bajo una legitimidad radicalmente nueva: la soberanía nacional.

En general, la suerte de las distintas iniciativas planteadas en este campo, a partir de 1813, fue adversa al contar con la oposición de los grandes propietarios, caso de la Iglesia y la nobleza en el caso de la península Ibérica y de los hacendados, mineros y comerciantes de América en general y de Nueva España, en particular, y con la del campesinado.<sup>9</sup>

Mientras en el caso de España la implantación general y definitiva del sistema de contribuciones directas no llegaría sino hasta el triunfo en 1843 del partido liberal moderado encabezado por el general Narváez sobre la opción carlista, a través de la denominada reforma fiscal de Mon y Santillán de 1845,<sup>10</sup> en el caso particular de México se evolución fue bastante azarosa y discontinúa en una arco temporal que va de 1836 a finales del siglo XIX.<sup>11</sup>

En ambos casos, se pretendía seguir las normas que inspiraban el modelo de reforma fiscal napoleónico, origen del denominado *modelo fiscal latino*. Básicamente este modelo se basaba en cuatro principios:<sup>12</sup>

- I. Reservar el monopolio de la exacción fiscal al Estado, otorgando las funciones de aprobación del paquete fiscal al poder legislativo, el

---

<sup>9</sup> Valle, 2001, p. 214-219. Para ver las vicisitudes de la contribución directa de 1813 en España. Véase, López Castellano, 1995, p. 153 y ss.

<sup>10</sup> Comín, 1996; Fontana, 1977; Fuentes Quintana, 1990; Saiz y Vidal, 2001.

<sup>11</sup> Carmagnani, 1998; Marichal y Marino, 2001; Piquero, 1845; Tenenbaum, 1985.

<sup>12</sup> Comín, 1996<sup>a</sup>, p. 206 (citado por Sánchez Rodríguez, 2001, p. 192).

cumplimiento del mismo al ejecutivo y su administración, mientras que el control de la correcta gestión se encomendaba a los tribunales.

- II. Simplificar el cuadro tributario y organizar la recaudación por medio de funcionarios públicos.
- III. Garantizar la seguridad de los contribuyentes.
- IV. Justificar los impuestos por su aportación al financiamiento de los gastos públicos.

Si bien estos principios se planteaban en todas las reformas fiscales liberales, tanto en sus versiones moderadas como progresistas, únicamente los puntos de “simplificar” y “garantizar la seguridad” parecía que tenían una conexión más o menos estrecha con el tema de las contribuciones directas.

En principio, eliminaban la maraña fiscal del Antiguo Régimen (en el caso de la monarquía española presentaba la difícil convivencia entre la Real Hacienda, la hacienda eclesiástica y la de la nobleza feudal solariega),<sup>13</sup> toda vez que reducían –al menos en teoría- la actuación indiscriminada de los funcionarios públicos. Lo cual posibilitaba, también en teoría, respetar el conjunto de derechos promulgados por los distintos regímenes liberales, al normar bajo los mencionados derechos las relaciones entre los funcionarios del fisco y los contribuyentes. Al respecto las críticas a la fiscalidad alcabalatoria como atentado a los ciudadanos es sintomática. Lo interesante de este tránsito del Antiguo Régimen en Europa occidental y en los antiguos territorios americanos de la monarquía española es que el cambio político acabó asociándose a un cambio fiscal que hacía de las contribuciones directas su bandera programática.

Por lo general, del conjunto de estas contribuciones, la rústica, se estimó constituiría la columna vertebral del sistema fiscal, en la medida que a principios del siglo XIX la agricultura no sólo era la actividad que ocupaba, por lo general, a más de dos tercios de la población sino que era el sector que generaba, al menos, el 70% del PIB. Era el rubro fiscal que parecía responder mejor a unos países de ambos lados del Atlántico que eran masivamente agrícolas.

### **Agricultura, propiedad y fiscalidad: La contribución rústica en México**

Centrándonos en el caso de México, cabe decir que, en términos generales, hasta el paquete de reformas de 1836, la agricultura se veía gravada únicamente por una contribución directa de origen medieval, los diezmos eclesiásticos, los cuales gravaban, según los casos, entre un 4% y un 10% la producción agrícola y ganadera del país. La eliminación de la coacción civil del diezmo en 1833 por parte del gobierno de Gómez Farías, significó que la agricultura mexicana se vio liberada *grosso modo* de cualquier contribución directa hasta la llegada de los centralistas al poder.

Como parte de su proyecto de reformas fiscales, y aprovechando los acontecimientos de Texas, el gobierno centralista propuso el 19 de mayo de 1836 un conjunto de nuevas contribuciones, así como la modificación de otras, que, tras el dictamen de la comisión de hacienda de 28 de mayo del mismo año, se fueron convirtiendo en leyes.<sup>14</sup> Con relación a la contribución rústica, el 5 de julio de

---

<sup>13</sup> Artola, 1982; Fontana, 1973.

<sup>14</sup> *Proyectos de ley sobre el establecimiento de contribuciones presentados al Congreso General por la comisión respectiva en la sesión de 28 de mayo de este año, mandados imprimir por acuerdo del mismo*, México, 1836, Imprenta de José Mariano F. de Lara.

1836, el ejecutivo promulgaba una ley que “establece una contribución anual de tres al millar sobre el valor de las fincas rústicas de la república”.<sup>15</sup>

La generalidad de la ley y la igualdad con la que se anunciaba la contribución rústica, cumplía plenamente los principios enunciados en cualquier iniciativa de reforma fiscal liberal del siglo XIX, y prefiguraba, junto al resto del paquete fiscal de 1836 (derechos de patente y contribución urbana), un modelo que podría acabar con el tan odiado sistema de aduanas interiores, las alcabalas,<sup>16</sup> a la vez que se dotaba al estado de una conjunto de rentas que reducían su dependencia de las aduanas externas y los agiotistas. Ahora bien, una serie factores doctrinales implícitos, así como de de concepción del gravamen y diversos problemas de recaudación, permiten entender el fracaso de la iniciativa, así como de las sucesivas, al menos, hasta 1847. Veámoslo.

*Factores doctrinales implícitos: el individualismo posesivo*

En los más de cuatro millones de kilómetros cuadrados que abarcaba el conjunto del territorio mexicano tras la independencia, la posesión/propiedad de los inmuebles rústicos presentaba una gran diversidad según regiones, estructuras demográficas y tradiciones jurídicas. Así, junto a un núcleo central y meridional de la república (nos referimos *grosso modo* a los estados/departamentos de México, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Yucatán), donde convivían importantes núcleos de propiedad/posesión individual junto a inmuebles inmersos en un régimen jurídico de propiedad/posesión colectiva (las antiguas *repúblicas de*

<sup>15</sup> Dublán y Lozano, 1876, tomo III, pp. 176-178.

<sup>16</sup> Tal y como manifestaba la comisión de hacienda del congreso, “si estas contribuciones [concretamente se referían a la rural a la de patentes] se establecen, su producto debe exceder al de las alcabalas interiores, y en ese caso deben suprimirse éstas por ser inseparables de su exacción de todas las vejaciones y males que en parte quedan indicadas”. *Proyectos de...*, p. 9.



*indios*), existía un territorio norteño donde predominaban las formas de propiedad/posesión individual bajo la forma de haciendas y ranchos.

¿Dónde radicaba el problema? En la medida que las formas de propiedad/posesión colectiva de la tierra habían subsistido de forma notable en el centro y el sur del país, a pesar de todos los embates sufridos por las repúblicas de indios (y en algunos casos por los cabildos de españoles), a lo largo del siglo XVIII y el periodo insurgente, en sus tierras de *repartimiento*, *comunidad* y de *propios*,<sup>17</sup> los promotores de la contribución rústica carecían de un elemento fundamental de cara a poder implementarla: un sujeto fiscal individual. Sólo aquellas tierras que gozasen de un propietario particular eran susceptibles de satisfacer el mencionado gravamen.

Este principio, como tal, no fue enunciado en la ley sobre contribución rústica de julio de 1836, ni tampoco en la ley de 3 de octubre del mismo año, la cual pretendía clarificar ciertos aspectos de la contribución rústica. En esta última podemos leer:

“Bajo la denominación de fincas rústicas a que se contrae la ley de 5 de julio último, se comprende *toda propiedad rural* con el nombre de hacienda, rancho, huerta u otro nombre semejante, cualquiera que sea su ubicación dentro o fuera de las poblaciones, con casa o sin ella, cuyos frutos pertenezcan a la agricultura; excepto aquellos sitios en poblado que se cultiven por mero recreo, sin especial utilidad del propietario”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Piquero, 1845, p. 53.

<sup>18</sup> Dublán y Lozano, 1876, Tomo III, p. 197. (La cursiva es nuestra).

Una vez cancelada en 1837 esta primera contribución rústica, se puede ver que la pretensión de gravar a la práctica totalidad de la propiedad raíz<sup>19</sup> se mantuvo en años posteriores, tal y como podemos apreciar en la reinstauración del gravamen sobre las fincas rústicas merced la ley de 8 de junio de 1838.<sup>20</sup> Una disposición que formaba parte del conjunto de reformas fiscales orientadas a hacer frente a un arbitrio extraordinario de 4 millones de pesos que permitiese sufragar los gastos de la guerra con Francia.

Sin entrar ahora en los pormenores de la evolución de las contribuciones de 1838,<sup>21</sup> es importante destacar que en las siguientes iniciativas de contribución rústica ensayadas hasta la guerra con los Estados Unidos se produjo una contracción sobre las unidades susceptibles de ser gravadas. Una reducción que significa hacer *explícito* mediante la inclusión de un catálogo de exenciones, y por tanto de forma indirecta, el concepto de propiedad privada. Así, en la ley de contribuciones urbanas y rústicas de 11 de marzo de 1841,<sup>22</sup> se indicaba:

Art.º 13. No estarán sujetos a esta contribución, los edificios que sirven de habitación a las comunidades religiosas de ambos sexos; los destinados inmediatamente a objetos de beneficencia pública; las universidades y casas de enseñanza que no sean propiedad particular; las haciendas y beneficios de metales, y en fin, las fincas urbanas y rústicas que se hallen incapaces de producir alguna especie de utilidad a sus dueños”.

---

<sup>19</sup> La alusión a las fincas de “recreo” parece más bien algo anecdótico y que cabría relacionar con la voluntad de ciertos grandes propietarios de hacer pasar por tales, inmuebles agrícolas en producción, con miras a no ser gravados.

<sup>20</sup> Dublán y Lozano, 1876, Tomo III, pp. 512-517.

<sup>21</sup> Un seguimiento de su suerte se puede realizar en la obra de Ignacio Piquero (Piquero, 1845).

Son patentes dos elementos a la hora de concebir las exenciones en la contribución sobre inmuebles urbanos y rústicos de 1841: la propiedad corporativa y la escasez de recursos. Colegios, órdenes religiosas, universidades, al igual que propiedades que no generasen rentas eran excluidas. La presencia de las haciendas y beneficios de metales, sin embargo, tiene más que ver con una aplicación de política económica que pretendía la protección del sector *clave* de la economía mercantil mexicana, en un país que continuaba siendo uno de los mayores productores de plata del mundo.<sup>23</sup>

Esta reducción de tierras susceptibles de ser fiscalizadas adquirió su máxima extensión con el decreto que “da nuevo arreglo a la contribución de tres al millar sobre fincas rústicas y urbanas” de 13 de enero de 1842.<sup>24</sup> En el preámbulo de su articulado, el para entonces presidente provisional, Antonio López de Santa-Anna, indicaba que, dadas las dudas y problemas aparecidos en el cobro de las contribuciones establecidas el 11 de marzo de 1841, era necesario aclarar ciertos puntos, en especial, las exenciones. Así, merced a su artículo primero, quedaban excluidos del gravamen del tres al millar los siguientes inmuebles urbanos y rústicos:

- I. Los edificios de habitación de las comunidades religiosas.
- II. Los palacios episcopales
- III. Los edificios de educación y beneficencia pública que perteneciesen al fondo de los mismos establecimientos

---

<sup>22</sup> Una ley que tenía como propósito obtener recursos para la campaña de Texas (cf. Art.º 1). Dublán y Lozano, 1876, Tomo IV, pp., 6-11. Es conveniente indicar que con esta ley tanto la propiedad urbana como la rural pasaron a tener la misma cuota exactora, tres pesos al millar.

<sup>23</sup> Velasco *et al.*, 1988.

<sup>24</sup> Dublán y Lozano, 1876, Tomo IV, pp. 94-97.

- IV. Las casas parroquiales
- V. Los bienes raíces nacionales
- VI. Los locales destinados al servicio público en las oficinas municipales, con excepción de los bienes de propios
- VII. Los bienes que en común disfrutasen los pueblos, así como los pertenecientes al fundo legal
- VIII. Los edificios anexos al servicio de las minas y las haciendas de beneficio
- IX. Las fincas que no se hallaren en estado de producir utilidad a sus dueños
- X. Todas las fincas o terrenos cuyo valor bajase de cien pesos, siempre que sus dueños no tuviesen otros bienes raíces

La ampliación de las exenciones es patente, en especial en tres rubros, los bienes nacionales, los del fundo legal y los del común de los pueblos. Todos ellos, a excepción de los predios mineros y los de escaso valor, presentaban como problema de fondo el carecer de un titular individualizado. Tal y como indicaba Ignacio Piquero, miembro del personal administrativo de la dirección general de contribuciones directas, al tratar en 1845 el problema de las casas parroquiales:

“Como es sabido, no son propiedades de los curas, sino de los pueblos en común, en los cuales *no hay personalidad* para el pago de contribución, y por consiguiente no hay sobre quien recaiga la obligación directa de satisfacerla...”<sup>25</sup>

La observación, referida a este efecto en particular, era atribuible al resto de bienes dado que, al carecer de un titular individualizado, no se podía determinar el sujeto que había de satisfacer el pago de la contribución.

A este argumento doctrinal se unía uno de carácter económico. Las tierras de *repartimiento* y las de *comunidad* de los pueblos no producían “utilidad efectiva pecuniaria, ni hay valor real” sobre el que pudiese recaer la contribución en la medida que ambos, por lo general, eran insignificantes. Únicamente en los bienes de *propios* de los pueblos sí que se podía proceder a imponer la contribución directa, en tanto en cuanto, la mayoría de dichos bienes estaban arrendados a particulares. Siempre que el valor de las propiedades arrendadas superase los 100 pesos, el pueblo había de satisfacer la contribución rústica a partir los ingresos recibidos en calidad de arrendamiento.<sup>26</sup> En la medida que los pueblos podían cargar el costo de dicha contribución a los individuos concretos que, a través de contratos, arrendaban las tierras de propios, sí que se vislumbraba el sujeto sobre el cual imponer la contribución.

Esta evolución es importante destacarla porque, en general, en la historiografía sobre la contribución rústica se suele indicar que ésta es una figura fiscal *objetiva*, real, en la medida que se construye a partir de las facultades tributarias estimadas mediante cosas u objetos, en este caso concreto la tierra deviene el elemento nuclear, productores de rendimientos. Por tanto se hace abstracción de las circunstancias personales de quienes las poseen y las disfrutan.<sup>27</sup> Una ejemplificación paradigmática de esta concepción la tenemos en la “Instrucción de la Asamblea Constituyente francesa para la aplicación de la Contribución territorial” (*Contribution Foncière*) de 1791:

---

<sup>25</sup> Piquero, 1845, pp. 51-52. La cursiva es nuestra.

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 53-54.

<sup>27</sup> Básicamente, esta es la caracterización realizada por uno de los principales estudiosos del modelo fiscal latino aplicado al caso español, Enrique Fuentes Quintana (Fuentes Quintana, 1990, p. 373).

“La Contribución territorial tiene como principal característica ser absolutamente independiente de la capacidad o facultades del propietario que la paga. Es sólo la existencia de la propiedad la que reclama el establecimiento del impuesto, el propietario no es más que un agente que aporta el pago del tributo debido por la propiedad”<sup>28</sup>

El análisis del caso mexicano permite hacer hincapié en que esta “abstracción” del sujeto concreto que disfruta del bien raíz proclamada en la revolución francesa y mantenida en los países que conformarán el denominado modelo fiscal latino se realiza en el entendido de que se habla de una propiedad privada. En su esfera, y como aplicación del principio de igualdad y justicia liberal, hacer abstracción del sujeto propietario implicaba construir una fiscalidad que eliminaba las exenciones basadas en el privilegio, caso de la nobleza y la iglesia. Sin embargo, en presencia de una propiedad corporativa amortizada, caso de los bienes de la iglesia, núcleos de beneficencia, centros educativos y, en especial, de los pueblos con tierras de repartimiento y comunidad, no era factible mantener la mencionada abstracción del sujeto propietario. Como formas de propiedad/posesión previas al ordenamiento jurídico burgués, ajenas por tanto a los principios del individualismo posesivo,<sup>29</sup> sólo podían recibir un tratamiento en la ley: la exención. Una exención

---

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 370.

<sup>29</sup> Estamos ante la concreción de una concepción de propiedad basada en el individuo autónomo del cual se deriva la propiedad. En palabras de C. B. Macpherson: “El individuo es propietario de su propia persona, por lo que nada le debe a la sociedad (...) La sociedad es una serie de relaciones entre propietarios. La sociedad política es un artificio contractual para la protección de los propietarios y para la ordenada regulación de sus relaciones” (Macpherson, 1970, p. 230). Frente a esta concepción, como ordenamiento previo sustentante del mundo jurídico medieval y, por extensión del Antiguo Régimen, también presente en el virreinato de Nueva España, existía la voluntad de construir la pertenencia partiendo de la cosa y de condicionarla a las exigencias de ésta (cf. Grossi, 1992, p. 109). Un análisis de la aplicación de este ordenamiento jurídico de Antiguo Régimen al caso de Nueva España lo tenemos en Peset y Menegus, 1994. Para un

que, a efectos fiscales, podía ser compensada con el mantenimiento de diversas figuras fiscales indirectas que gravasen el consumo o, más efectivo todavía, la restauración, bajo otros principios teóricos, del impuesto de capitación que, aunque gravaba a la totalidad de los grupos sociales país, recaía básicamente en la gran masa de campesinos. Esto último parece claro en caso mexicano en el llamado “derecho de capitación” de 1838 y 1842.<sup>30</sup>

### *Problemas de concepción del gravamen*

Otro de los factores que explican el fracaso de la contribución rústica en México en el periodo 1835-1846 radica en la forma en que fue concebido el gravamen. Por lo general, como parte del denominado modelo tributario latino, la contribución rústica era una imposición directa *de producto*, lo cual implicaba que al fiscalizar el resultado del proceso de producción, contabilizado en sus valores netos (después de descontar los costes efectuados en la producción correspondiente) se buscase gravar la fuente en la cual se generaba el mencionado producto. En el caso que nos atañe la tierra.<sup>31</sup> Esto significaba que el impuesto se establecía sobre *la renta neta media de la tierra*.<sup>32</sup>

Todo este difícil ejercicio estadístico que implicaba la elaboración de un catastro agrícola en el cual, tras determinar las distintas *clases* de tierras (regadío, seco,

---

estudio de la evolución histórica de la propiedad en general y de la privada en particular ver, Attali, 1989, Waldron, 1990.

<sup>30</sup> Dublán y Lozano, 1876, Tomo III, pp. 568-569 y Tomo IV, p. 147-150.

<sup>31</sup> Una explicación amplia de este modelo lo tenemos en Fuentes Quintana, 1990, pp. 362-365.

<sup>32</sup> Tal y como indicaba la *contribution foncière* en su arreglo mediante la ley de 3 de febrero del año VII, la renta neta media de la tierra se establecería a través del valor del producto bruto o total que una propiedad territorial podía rendir, en un año corriente, en el supuesto de que se cultivase según la costumbre del país, menos los gastos de cultivos, semillas, cosecha y administración. Ese año común se refería al rendimiento de dicha tierra en los quince años anteriores eliminando los dos peores y los dos mejores. *Ibidem*, p. 376. Una estructuración similar se procedió a realizar en la *Contribución de inmuebles, cultivos y ganadería* establecida por Alejandro Mon en España en 1845 Cf. Segura, 1988, p. 105.

frutales, viña, bosque, etc.), así como las diversas *calidades* (primera, segunda, tercera, etc.) hacía que surgiese un *líquido imponible* (diferencia del producto bruto y los gastos) a cada tipo de tierra.<sup>33</sup> Sin embargo, en el caso mexicano el gravamen no fue concebido así.

Aunque no hemos podido localizar el reglamento de contribuciones rústicas y urbanas de 11 de agosto de 1836,<sup>34</sup> gracias a los distintos padrones de fincas rústicas de dicho periodo conservados<sup>35</sup> y a las leyes ya mencionadas de 5 de julio de 1836 y de 11 de marzo de 1841, sabemos que la contribución rústica en México se estableció sobre el “valor actual y verdadero” de las fincas y no sobre la renta neta media que generaban las mismas. De ahí que el objetivo de la administración no fuese construir documentos estadísticos que, además de determinar las propiedades, se indicasen sus clases y calidades con miras a obtener el valor bruto de las producciones según unidades de superficie al cual se había de restar los gastos generados. En el caso de la contribución rústica mexicana el único indicador era el valor de la propiedad entendido como el avalúo de...

“los terrenos, aguas, aperos, ganados, utensilios, oficinas, y en general, todas aquellas cosas que sirven peculiarmente a las labores y demás especulaciones de dichas fincas; pero no se comprenden las semillas o frutos en berza, los cosechados y almacenados para su venta, los muebles

---

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 114.

<sup>34</sup> Un reglamento que es citado directamente en diversos decretos y leyes del periodo centralista y que, merced, el decreto de 7 de noviembre de 1843 fue derogado (ver Dublán y Lozano, 1876, Tomo IV, p. 628-630).

<sup>35</sup> Algunos ejemplos de estos padrones localizados en el Archivo General de la Nación, son el de Córdoba de 1837 (AGN, CD, caja 8); el de Tehuacan de 1837 (AGN, CD, caja 46) o el de Jalapa de 1838 (AGN, CD, caja 8).



de uso de los dueños y los demás objetos de ornato, así como los destinados a su comodidad personal”.<sup>36</sup>

Tal y como se entendía en la época, la contribución de tres al millar se establecería sobre el *fondo dotal* de las fincas rústicas y no sobre la renta neta media de la tierra. El producto de esta pesquisa por receptorías y administraciones de rentas eran simples listados de propiedades rústicas con sus titulares, sus valores y el cargo establecido en función de la cuota (tres al millar). Un ejemplo de esto lo podemos ver en el siguiente padrón sobre la contribución rústica de 1836 en uno de los partidos más importantes, fiscalmente hablando, del Estado de México (ver cuadro).

**Cuadro 1: Padrón de fincas rústicas de la receptoría de Morelos (Estado de México) de 1836**

Inmueble	Propietario	Valor	Cargo
Casasano (hacienda)	Gorivar, Juan	90000	90 p.
Tenextepango (hacienda)	Cortina Chávez, Ignacio	66500	133 p.
Mapastlán (hacienda)	Sabiñón, Francisco	25000	25 p.
Buenavista (hacienda)	Michaus, Miguel	46000	46 p.
Santa Inés (Hacienda)	Michaus, Miguel	46000	46 p.
Hospital (hacienda)	Michaus, Miguel	85000	85 p.
Calderón (hacienda)	Alonso González, Pedro	64000	64 p.
Y Estancia de Pala			
Huerta	Garcilaso, Joaquín	250	6 r.
Huerta	Abelar, Rafael	250	6 r.
Huerta	Abelar, José Maria	225	3 r.
Huerta	Tenorio, Rafael	500	1.3
Huerta	Pérez, Francisco	300	7 r 3 g.
Huerta	Fuentes, Trinidad	2000	6 p.
Huerta	Mondragón, Ignacio	250	6 r.
Huerta	Ursúa, Antonio	500	1 p. 4 r.

Fuente: AGN, CD, caja 46

Claramente se puede apreciar cómo la contribución se establecía sobre el valor de la propiedad, estimado según distintos procedimientos (declaraciones juradas, escrituras públicas, remates en concursos de acreedores, etc.), y no sobre la renta

<sup>36</sup> Dublán y Lozano, 1876, Tomo IV, p. 7.

que generaban. Si asumimos, tal y como indica Enrique Fuentes Quintana, que la aparición de las contribuciones directas de producto se encuentra en el camino que iría de gravar a la riqueza a gravar a la renta, como un punto intermedio, la configuración de la contribución rústica en México en el periodo de 1835-1846 parece que apenas escapaba del primer polo.<sup>37</sup>

### **Resultados: la contribución rústica mexicana de 1836 y su comparación con el modelos tributario latino**

Es evidente que esta formulación del impuesto directo sobre fincas rústicas respondía a necesidades del erario de obtener rápidos ingresos a un coste mínimo, sin las dilaciones que la elaboración de un catastro según las contribuciones rústicas basadas en la renta neta media de la tierra presuponía. Sin embargo, esto implicaba arriesgar los resultados esperados. El análisis del cuadro anterior, permite ejemplificar esto.

La conjunción de posesiones/propiedades exentas, al carecer de un propietario individualizado o no alcanzar un valor superior a los 100 pesos, unida a la configuración del tributo como un impuesto sobre el valor de los fondos dotales de los predios rústicos, hace que un partido como el de Morelos, perteneciente al distrito de Cuernavaca del Departamento de México, con una de las agriculturas mercantiles más desarrollados del país, compuesto de una ciudad (Morelos), 11 pueblos, 13 haciendas azucareras (algunas abandonadas durante la insurgencia) y 21 ranchos,<sup>38</sup> únicamente declarase 16 propiedades con un valor catastral de

---

<sup>37</sup> Fuentes Quintana, 1990, p. 13.

<sup>38</sup> Orellana, 1995.

426 775 pesos, el cual apenas reportaba a la hacienda pública unos 500 pesos anuales, es decir, el 0.1% del mencionado valor. Un dato que se vuelve más claro si tenemos en cuenta que, ocho de estas propiedades, todas ellas haciendas azucareras, aportaban el 99% del total recaudado. Es un ejemplo nítido de cómo la pequeña y mediana propiedad, así como las tierras comunales y de repartimiento de los pueblos no fue gravada por la contribución rústica.

Esta combinación de exenciones y procedimientos concretos para determinar la contribución rústica en México permite entender la gran diferencia que existe a la hora de comparar los porcentajes de participación de dicha figura fiscal en el conjunto de las contribuciones directas, con relación al denominado modelo tributario latino (ver cuadro).

**Cuadro 2: Participación porcentual de la contribución rústica en las contribuciones directas en México, 1836**

	Contribución Urbana	Contribución Rústica	Derecho de Patente	Total
Recaudación (pesos)	147 174	159 203	218 867	570 580
Porcentaje	28.60%	31%	42.60%	100%

Fuente: *Segunda parte de la Memoria de la Hacienda Nacional de la Republica Mexicana. Cuenta general de valores y distribución de las rentas del erario Nacional en el decimotercio año económico de 1836 – 1837, México, 1838 y Anexo I.*

El elemento que sobresale es la constatación de que el derecho de patente sobre las distintas actividades mercantiles de 1836 aportaba casi el 43% del total de las contribuciones directas, mientras que la contribución rústica, apenas superaba a la urbana, sin llegar a generar un tercio del total de los ingresos. Nada de esto se produce en las contribuciones directas de Francia o España.<sup>39</sup> Así, a mediados del siglo XIX, en ambos países, la contribución directa sobre la industria y le comercio nunca superó el 3.7% del total de los ingresos fiscales de sus respectivos estados,

mientras que la contribución sobre los inmuebles urbanos y rústicos, genéricamente denominada contribución territorial, nunca bajó del 19 por ciento. Y de este porcentaje la mayor parte pertenecía a la contribución rústica, tal y como podemos apreciar en le siguiente cuadro:

**Cuadro 3: Distribución de la riqueza territorial en España en 1855 según la fiscalidad directa (en miles de pesetas)**

	Propiedad Rústica	Propiedad Urbana	Propiedad Pecuaría	Total
Total	438 482	133 052	49 390	620 924
Porcentaje	70%	22%	8%	100%

Fuente: Vallejo, 2001, p. 192.

El contraste entre los resultados de las fiscalidades de México y España es extremo. A pesar de tener la contribución urbana en México un gravamen inferior al de la contribución rústica (dos al millar frente el tres al millar), lo cual se podía ver compensado al poseer las fincas urbanas un valor medio por unidad superior al de las fincas rústicas, su aportación a las arcas del estado era casi idéntica (28.6% y 31% respectivamente), lo cual implicaba que en los diferentes padrones de fincas urbanas realizados en los departamentos de la república se tuvo que inscribir un número muy superior de propiedades al asentado en los padrones de fincas rústicas. Algo incomprensible en un país masivamente agrícola como México. Por el contrario, en el caso de España, los resultados de la fiscalidad directa sobre la contribución territorial, a pesar de todas las ocultaciones y fraudes, nos muestra cómo la riqueza denominada genéricamente *rústica* (rural y pecuaria unidas), casi alcanzaba el 78% del total declarado, mientras que la urbana no superaba el 22 por ciento.

---

<sup>39</sup> Comín, 1996, pp. 215-216.

Si a este conjunto de factores (fuerte presencia, aunque desigual en su distribución espacial, de la propiedad corporativa amortizada no sujeta a fiscalización; exención de la pequeña y mediana propiedad; un impuesto que gravaba el valor del inmueble y no su renta neta media), unimos los problemas administrativos de recaudación (ausencia de un personal específico preparado con directivas claras, carencia de una estructura territorial de recaudación jerarquizada propia y eficiente),<sup>40</sup> más los derivados de la constitución de padrones *literales* y no *gráficos*, según la vieja tradición de los inventarios de propiedades del periodo colonial,<sup>41</sup> que claramente favorecían la ocultación y el fraude, se puede entender porqué la contribución rústica en México no pudo cumplir las esperanzas que había generado en los políticos promotores del sistema centralista, máxime si se esperaba que con ella y el apoyo de la contribución urbana y el derecho de patente se pudiese abolir la renta de alcabalas.<sup>42</sup> Los límites doctrinales, las exenciones establecidas, la concepción del gravamen, aunados a los problemas de carácter técnico-administrativo impidieron que la contribución rústica mexicana se constituyese en la espina dorsal del sistema de contribuciones directas.

---

<sup>40</sup> Esta problemática se puede seguir en el texto, ya citado, de Ignacio Piquero (Piquero, 1845).

<sup>41</sup> Para ver las grandes implicaciones fiscales que se derivan de conformar un padrón literal o gráfico de la propiedad rústica para el caso español, véase, García, 1986; Muro, Nadal y Arteaga, 1996; Pro, 1987, 1993, 1995 y Vallejo, 2001, 2001<sup>a</sup>.

<sup>42</sup> La comparación de la recaudación por contribuciones directas del departamento de México entre 1836-1837 (el territorio que mejor las implantó en 1836, junto al Distrito Federal), con la recaudación de alcabalas de la misma entidad no dejaba lugar a dudas. Mientras que por concepto de alcabalas brutas ingresaron en el año fiscal de 1834 a las arcas del mencionado departamento 467 591 pesos, los ingresos (también brutos) por concepto de contribuciones directas fueron de 84 622 pesos (el 10.2% por contribución urbana, el 61.2% por rústica y el 28.5% por derechos de patente), es decir, apenas el 18 por ciento. Cf. Anexo I y Marichal, Miño y Riguzzi, 1994, p. 148. (Es preciso indicar los datos del departamento de México en 1836-1837 incluían a Tlaxcala, mientras que en los de alcabalas de 1834 no lo hacen).

## Referencias y siglas

AGN            Archivo General de la Nación, México.  
CD             Contribuciones Directas

Artola, Miguel

1982 *La Hacienda del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza Editorial / Banco de España.

Attali, J.

1989 *Historia de la propiedad*, Barcelona, Planeta.

Calvo Alonso, Carlos

1988 “El catastro de Ensenada. Proyecto de única contribución en la Corona de Castilla”, en Segura i Mas (Coord.), p. 89-112.

Camarero Bullón, Concepción

1993 *El debate de la Única Contribución. Catastrar las Castillas, 1749*, Madrid, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria / TABAPRESS.

Carmagnani, Marcello

1998 “Finanzas y estado en México, 1820-1880”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano (Coords.), *Las finanzas públicas en los siglos XVIII-XIX*, México, Instituto Mora / El Colegio de Michoacán / El Colegio de México / Instituto de Investigaciones Históricas – UNAM, pp. 131-177.

Comín, Francisco (ed.)

1996 *La reforma fiscal de Mon – Santillán. Hacienda Pública Española*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.

1996<sup>a</sup> *Historia de la Hacienda Pública, I. Europa*, Barcelona, Crítica.

Dublán, Manuel y José María Lozano

1876-1912 *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república*, México, Imprenta del Comercio.

Fernández Navarrete, Donato

1978 “La evolución histórica de la Contribución Territorial rústica”, *Agricultura y Sociedad*, núm. 8, 183-209.

Fontana, Josep

1973 *Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español, 1823-1833*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.

1977 *La Revolución Liberal (Política y Hacienda), 1833-1845*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.

Fuentes Quintana, Enrique

1990 *Las reformas tributarios en España. Teoría, historia y propuestas*, Barcelona, Crítica.

GARCÍA BADELL, G.

1968 *La contribución territorial y el Catastro de la riqueza rústica*, Madrid.

Grossi, Paolo

1992 *La propiedad y las propiedades. Un análisis histórico*, Madrid, Editorial Cívitas.

Hernández Andreu, Juan

1971 “La Única Contribución del Marqués de la Ensenada y el impuesto único de la escuela fisiocrática”, *Moneda y Crédito*, núm. 117, 67-79.

1972 “Evolución histórica de la contribución directa en España desde 1700 a 1814”, *Revista de Economía Política*, núm. 61, 31-90.

Ibarra, Antonio

2001 “De la alcabala colonial a la contribución directa republicana. Cambio institucional y continuidad fiscal en una economía regional mexicana, Guadalajara 1778-1834”, en Ernest Sánchez Santiró, Luis Jáuregui y Antonio Ibarra (Coords.), *Finanzas y política en el mundo iberoamericano. Del Antiguo Régimen a las naciones independientes*, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Instituto Mora / UNAM, pp. 317-350.

Jáuregui, Luis y José Antonio Serrano O.

1998 “Introducción”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano (Coords.), *Las finanzas públicas en los siglos XVIII-XIX*, México, Instituto Mora / El Colegio de Michoacán / El Colegio de México / Instituto de Investigaciones Históricas – UNAM, pp. 7-26.

López Castellano, Fernando

1995 *Liberalismo económico y reforma fiscal. La contribución directa de 1813*, Granada, Universidad de Granada.

Marichal, Carlos

2001 "Introducción" en Carlos Marichal y Daniela Marino, *Impuestos y política en México, 1750-1860*, México, El Colegio de México, pp. 19-60.

Marichal, Carlos y Daniela Marino

2001 *Impuestos y política en México, 1750-1860*, México, El Colegio de México.

Marichal, Carlos, Manuel Miño Grijalva y Paolo Riguzzi

1994 *El primer siglo de la hacienda pública del Estado de México, 1824-1923*, 4 Vols., México, El Colegio Mexiquense / Gobierno del Estado de México.

Macpherson, C.B.

1970 *La teoría política del individualismo posesivo*, Barcelona, Fontanella.

Muro, José Ignacio, Francesc Nadal y Luis Arteaga

1996 *geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870*, Barcelona, Ediciones del Serbal.

Orellana, Ignacio

1995 *Descripción geográfica y estadística del distrito de Cuernavaca, 1826*, México, CIESAS.

Peiró, Antonio

1988 "La única contribución", en Segura i Mas (Coord.), p. 75-88.

Peset, Mariano y Margarita Menegus

1994 "Rey propietario o rey soberano", *Historia mexicana*, Vol. XLIII (4), pp. 563-600.

Piquero, Ignacio

1845 *Breve instrucción sobre las contribuciones directas establecidas en la nación desde el año de 1836*, México, Imprenta de Vicente G. Torres.

Pro, Juan



1987 “Información fiscal agraria, redes clientelares y progresismo: la Estadística de la Riqueza de 1841”, *Revista internacional de Sociología*, núm. 45, 199-216.

1993 “Las élites locales y el poder fiscal del Estado en la España contemporánea”, en *Les élites locales et l'État dans l'Espagne moderne, XVIe-XIXe siècles*, París, pp. 283-295.

1995 “Ocultación de la riqueza rústica en España (1870-1936): acerca de la fiabilidad de las estadísticas sobre la propiedad y el uso de la tierra”, *Revista de Historia Económica*, I, pp. 89-114.

Riera Vayreda, Francesc

1988 “La talla general”, en Segura i Mas (Coord.), p. 61-74.

Rivero de Andrea, Fernando

1957 *El catastro en España, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Suiza. Estudio de legislación comparada*, Madrid, Ministerio de Hacienda.

Ruiz Torres, Pedro

1988 “El equivalente valenciano”, en Segura i Mas (Coord.), pp. 47-60.

Saiz Pastor, Candelaria y Javier Vidal Olivares

2001 *El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Economía*, Madrid, Editorial Síntesis.

Sánchez Rodríguez, Martín

2001 “Política fiscal y organización de la Hacienda Pública durante la República centralista en México, 1836-1844”, en Carlos Marichal y Daniela Marino, *Impuestos y política en México, 1750-1860*, México, El Colegio de México, pp. 189-214.

Segura i Mas, Antoni

1988 “El catastro de Patiño en Cataluña”, en Segura i Mas (Coord.), pp. 31-46.

1988<sup>a</sup> “La reforma de Mon (1845) y los amillaramientos de la segunda mitad del siglo XIX”, en Segura i Mas (Coord.), pp. 113-134.

Segura i Mas, Antoni (Coord.)

1988 *El catastro en España, 1714-1906 (Vol. I)*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda – Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

Serrano Ortega, José Antonio

2001 *Jerarquía territorial y transición política. Guanajuato, 1790-1836*, México, El Colegio de Michoacán / Instituto Mora.

Tenenbaum, Barbara A.

1985 *México en la época de los agiotistas, 1821-1857*, México, Fondo de Cultura Económica.

1998 “Sistema tributario y tiranía: las finanzas públicas durante el régimen de Iturbide, 1821-1823”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano (Coords.), *Las finanzas públicas en los siglos XVIII-XIX*, México, Instituto Mora / El Colegio de Michoacán / El Colegio de México / Instituto de Investigaciones Históricas – UNAM, pp. 209-226.

Valle Pavón, Guillermina del

2001 “El consulado de México en el financiamiento de la guerra contra los insurgentes, 1811-1817”, en Ernest Sánchez Santiró, Luis Jáuregui y Antonio Ibarra (Coords.), *Finanzas y política en el mundo iberoamericano. Del Antiguo Régimen a las naciones independientes*, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Instituto Mora / UNAM, pp.203-222.

Vallejo Pousada, Rafael

2001 “Reforma y contrarreforma tributaria en 1845 y 1852”, *Revista de Historia Económica*, año XIX, A, pp. 53-80.

2001<sup>a</sup> *Reforma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 1845-1900*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

Velasco Ávila, Cuauhtémoc et al.

1988 *Estado y minería en México (1767-1910)*, México, Fondo de Cultura Económica / SEMIP.

Waldron, J.

1990 *The Right of Private Property*, Oxford, Clarendon Press.

Zafra Víctor, Manuel

1996 “El marco político y la génesis del caciquismo”, en Antonio robles (Comp.), *Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea*, Madrid, siglo XXI, pp. 95-115.

## Anexo I

### Estado núm. 17

(Decimotercio año económico de 1 de julio de 1836 a 30 de junio de 1837)

*Contribuciones directas de dos al millar sobre fincas urbanas, tres al millar sobre fincas rusticas y de derecho de patente sobre tiendas y almacenes de comercio, impuestas por las leyes de 30 de junio, 5 y 7 de julio de 1836.*

Departamentos		2 al millar	3 al millar	Patente	Totales	Gastos	Liquido
México	Capital	60450.2	651	74192	135293.2	29686.2	105606.7
	Tacubaya (receptoria)	336.6	165.4	687.3	1189.3	37.6	1152
	Guadalupe Hidalgo (idem)	147.2	48.1	80.1	275.4	12.4	263.1
	Mexicalzingo (idem)	66.7	194.4	61.3	322.4	15.3	307.3
	Administraciones Subalternas del Departamento	8625.3	51839.1	24197.6	84662	5488.6	79173.4
	Total México	69626.6	52898.3	99218.6	221743.5	35240.7	186503.1
Puebla		20616.3	29686.6	23109.6	73412.5	9403.6	64008.9
Veracruz		16944.7	8491.4	26554.2	51990.3	4049.5	47940.8
Zacatecas		5498.6	16013.7	7418.3	28930.6	672.7	28257.9
Michoacán		4444.3	12769	6368	23581.3	693.7	22887.6
Oaxaca		1175.5	514.5	3159.6	4849.6	293.7	4555.9
San Luis Potosí		6421.7	8062.6	16444.4	30928.7	¿?	30928.7
Durango		1413.3	2280.6	2446.7	6140.6	190.1	5950.5
Guanajuato		¿?	¿?	¿?	25862.3	1178	24684.3
Jalisco		2901.2	4149.2	5706.5	12757.2	¿?	12757.2
Nuevo León		2583.1	4364.4	2285.2	9232.7	261.4	8971.3
Yucatán		9294	9270.2	9335.6	27899.8	1961.4	25938.4
Aguascalientes		2708.4	5406.3	2483.6	10598.3	751.6	9846.7
Tabasco		364.1	699	3457	4520.1	212.7	4307.4
Sonora		250.7	86.7	1287	1624.4	70.4	1554
Querétaro		¿?	¿?	¿?	19471.7	1249.1	18222.6
Tamaulipas		1387	1467.2	4550.7	7404.9	470.2	6934.7
Chiapas		409.1	860.3	152.1	1421.5	644.7	776.8
Coahuila		1133.6	2181.2	3944.4	7259.2	287.3	6971.9
Chihuahua		¿?	¿?	943.5	943.5	62.4	881.1
Total		147174.6	159203.5	218867.5	570580.3	57696.2	512884.1

Fuente: *Segunda parte de la Memoria de la Hacienda Nacional de la Republica Mexicana. Cuenta general de valores y distribución de las rentas del erario Nacional en el decimotercio año económico de 1836 – 1837*, México, 1838. (Biblioteca Nacional –UNAM, Fondo Reservado).